El Cotidiano
ISSN: 0186-1840
cotid@correo.azc.uam.mx
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
México

Peñaloza, Pedro José
El ocaso de la superstición punitiva
El Cotidiano, núm. 170, 2011, pp. 39-48
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Distrito Federal, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=32520935005

Cómo citar el artículo
Número completo
Más información del artículo
Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica
Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

El ocaso de la superstición punitiva

Pedro José Peñaloza*

Hoy México es un espacio en donde se ha reproducido la desigualdad social, el ingreso real de los hogares se redujo, aumentó la proporción de la población que carece de acceso a la alimentación, los compatriotas que viven en condiciones de pobreza pasaron de 48.8 a 52 millones de personas; y la población que vive en condiciones de la llamada extrema pobreza se mantuvo en 11.7 millones de personas.

Quien no se mueve no siente las ataduras.
Rosa Luxemburgo

Abordaje introductorio

A. Los estertores de un gobierno colapsado

A estas alturas del sexenio podemos afirmar, con certeza, que la curva de aprendizaje de la administración calderoniana resultó demasiado onerosa –en más de un sentido– para los contribuyentes y, políticamente, un desastre para los haberes panistas.

Lo anterior tiene sustento en las cifras, los hechos y las sensaciones ciudadanas mayoritarias. La revisión documentada y puntual del curso que siguió el gobierno, comprueba que el saldo del licenciado Calderón es deficitario.

Cada día quedó más claro que las distancias entre sus propuestas, no sólo en la coyuntura electoral, sino en el ejercicio de gobierno resultaron, por lo menos, limitadas, e incluso llegaron al extremo de no cumplir con los parámetros básicos que exige la edificación de las políticas públicas, a saber: un diagnóstico, un pronóstico y una proyección longitudinal. En términos latos, el titular del Ejecutivo optó por el efectismo discursivo como único camino para tratar de refrendar la legitimidad cuestionada y con ello exorcizar la ineficacia de sus iniciativas.

En este contexto, es perfectamente válido que con los indicadores disponibles y las proyecciones previsibles, podamos calificar ya a la segunda administración panista; y advertir que, desde el punto de vista del resultado de la gestión, las cuentas son insatisfactorias y ostensiblemente están por debajo de un resultado mediocre; con lo que se prefigura un horizonte por demás complejo en las pretensiones triunfalistas de Calderón y de la cúpula panista, para las elecciones presidenciales de julio del 2012.

Es evidente que el presidente tiene muy poco que aportar para apuntalar a su partido. Es más, en los

* Doctor en Ciencias Penales y Política Criminal; Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Autor del libro "¿Castigo sin prevención? La crisis del modelo de seguridad pública en México", Editorial Porrúa.

últimos meses hemos observado como lejos de construir vías alternas para dar un giro a su viaje al precipicio, se empeña en hundirse y, con él arrastrar a su partido.

B. Una revisión de la relación del licenciado Calderón con algunos actores de la vida pública del país y con franjas demandantes de atención, nos ayudará a describir y a entender, con mayores elementos, el perfil y la morfología del grupo en el poder, y especialmente su concepción del significado de escuchar y procesar acuerdos con la sociedad. Veamos:

Una constante de la administración calderonista, ha sido desechar, satanizar y subestimar las críticas a su gestión, y como resultado de esa concepción autoritaria, resultó imposible construir andamiajes de entendimiento entre el gobierno y la diversidad mexicana; no hubo iniciativas oficiales para evaluar la gestión –por supuesto, mas allá de eventos a modo, de mera autocomplacencia–; ni mucho menos se esbozó alguna autocritica, en virtud de que ese vocablo está abolido en los regímenes "infalibles" y de matriz antidemocrática. Calderón no se atrevió a explicar el por qué cambió de prioridades oficiales, de autoproclamarse como "el presidente del empleo", al de ser un gobernante monotemático de la (in) seguridad pública.

Es decir, el presidente se encapsuló en un dogmatismo rampante: no hubo más verdad que la que se procesaba e inventaba en Los Pinos; igualmente, se publicitó la convocatoria al diálogo presidencial, pero se aplicó el monólogo autoritario y unívoco; la relación pública con los disidentes –reales y aparentes– se tradujo más en una especie de ejercicio terapéutico y hasta catártico, que en un ejercicio de apertura y sensibilidad. Claro, algunos de los convidados a esos "diálogos", aceptaron jugar el papel de simples piezas escenográficas de los sucesivos capítulos de la simulación.

Los mecanismos de comunicación, que privilegió Calderón con diversos segmentos sociales, estuvieron generalmente marcados por ese añejo estilo de peticionismo y subordinación presidencialista.

Y todavía más. El barniz "popular" que frecuentemente usó en sus discursos, oscilaba entre lo grotesco y lo simplón. Estos desplantes verbalizados sólo evidenciaron su carencia de consistencia política, y el evidente estreñimiento de propuestas para la solución a la conflictiva social.

C. En este marco de debilidad gubernamental, y ante la incapacidad creciente para encarar las múltiples demandas de la agenda nacional, Calderón optó por refugiarse en el demandante archipiélago de la inseguridad y la violencia. Su incursión fue tan espectacular como ineficaz. Los datos –oficiales, académicos y de organismos internacionales– evidencian la pobreza de los resultados obtenidos.

Así, sin más herramientas que su reiterada actitud "frontal" y "firme" contra la delincuencia organizada, se avocó a transitar por el camino anti garantista y violatorio de los derechos humanos –con el apoyo del PRI–, cubriendo sus concepciones con el celofán de los juicios orales, como nos ha recordado Sergio García Ramírez, al señalar que: la Constitución de la Republica es una víctima inerme: por un lado, se conservará el régimen jurídico ordinario, heredado de las mejores tradiciones liberales y democráticas, con derechos y garantías; y por otro, desarrollaremos y consolidaremos un orden penal especial y hasta "excepcional", en la que declinan los derechos y las garantías. En cambio, crecen las atribuciones de la autoridad, la exasperación por el auge del crimen organizado dictó las sencillas recetas que desandan el camino e inician la "guantanamización" de la justicia penal. En suma, agua y veneno[1].

Como resultado del triunfo de esta vía y la falta de talento para darles certidumbre de presente y futuro a las mayorías depauperadas, hoy estamos frente al precipicio. El grupo en el poder festina el desastre, e insiste en convocarnos a un viaje que conduce a ninguna parte.

D. El balance está a la vista de quien lo quiera ver: Calderón y sus aliados, dejan sumido al país en una creciente descomposición social, y con violencia exponencial; sin rutas de salida ante la inequidad social, y a merced de la voracidad de las fracciones más poderosas de la burguesía transnacional y sus epígonos nacionales.

Para cumplir con el espacio que nos brinda la revista *El Cotidiano*, en las próximas líneas expondremos algunos de los rasgos principales que develan a un gobierno incapaz de proponer una política multidisciplinaria y caleidoscópica.

El intocado mundo del trabajo y el ingreso

La confusión de las prioridades del actual gobierno lo llevó a evadir los problemas centrales por los que atraviesan amplios sectores de la población.

En 2010, la realidad social y económica de México se impuso al discurso de recuperación difundido por el gobierno del presidente Felipe Calderón.

En los últimos meses de ese año, la pobreza se profundizó y los niveles de bienestar de la mayoría de los mexicanos

[1] Revista *Examen*, marzo 2008, p. 17.

se redujeron. Por ejemplo, de 2000 a 2009, los productos de la canasta básica, como el azúcar y el frijol tuvieron aumentos de 169 y 142%, respectivamente; el precio de la harina de trigo aumentó alrededor de 40%; mientras los salarios apenas se incrementaron 51.4% en igual periodo, según cifras del Banco de México, el Inegi y la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).

Cabe señalar, por ejemplo, que en 2010 la cifra de nuevas plazas registradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social se ubicó en cerca de 960 mil, con lo que no se restituyen las perdidas en el bienio 2008-2009 y, mucho menos, el rezago histórico de ocupación.

En ese sentido, en enero de 2010, según un reporte del Inegi, casi 60% de la población en edad de trabajar (25.7 millones de mexicanos) laboraba en la economía informal. Meses después, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) informó que, de septiembre de 2009 al mismo mes de 2010, el número de mexicanos sin seguridad social pasó de 28.2 a 28.4 millones; en el último cuatrienio de referencia, la población desempleada se disparó 65%, al pasar de 1.6 a 2.6 millones[2].

A. Empleos mínimos, mentiras máximas

Contrario a las cuentas alegres de los voceros, la tasa de desocupación a nivel nacional se ubicó, en noviembre de 2010, en 5.60% de la Población Económicamente Activa (PEA), lo que implica un crecimiento respecto a octubre y, además, representa el nivel más alto en los últimos 13 meses.

Sin embargo, fue necesario que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), precisara la información para desmentir la versión gubernamental acerca del panorama del empleo. En contraste con la versión del secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien había publicitado que, en lo que va del sexenio se habían creado un millón 529 mil plazas, la ASF enfatizó que sólo han sido 950 mil 772, cuando la meta impuesta en el Programa Nacional de Financiamiento al Desarrollo (Pronafide) 2008-2012 fue de 2 millones 282 mil 124 puestos de trabajo[3].

También, la ASF, desmintió al director del IMSS, Daniel Karam, en torno al número de registrados en dicha institución, en el periodo correspondiente entre diciembre de 2010 y junio de 2011, ya que el funcionario sostuvo que habían sido 979 mil, cuando en realidad fueron 450 mil 305 los nuevos asegurados[4].

Para ratificar la gravedad del problema y tomando en consideración el dato de la más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), al tercer trimestre de este año, se señala que la PEA está compuesta por 47 millones 131 mil 536 personas, en donde al menos 2 millones 639 mil 366 se encuentran desocupadas.

Sin embargo, la cifra podría ser mayor, en virtud de que la ENOE contempla una población de 108.5 millones, mientras que el último dato oficial dado a conocer por el INEGI señala que la población de México es de 112.3 millones. La comparación anual, no muestra cambios significativos en la tasa de desocupación, puesto que se ubicó en 5.28% de la población, contra 5.26% del mismo mes de 2009.

La radiografía de la población ocupada alcanzó el 94.72% de la PEA en el penúltimo mes de ese año, de los cuales el 70.3% opera como trabajador subordinado y remunerado ocupando una plaza o puesto de trabajo; mientras tanto el 3.6% son patrones o empleadores, y el 19.7% trabaja de manera independiente o por su cuenta, y finalmente el 6.4% se desempeña en los negocios o en las parcelas familiares, contribuyendo de manera directa a los procesos productivos, pero sin un acuerdo de remuneración monetaria[5].

B. Las aspirinas y la amnesia del presidente

Los programas para incentivar el empleo creados por el gobierno de Felipe Calderón han resultado un fracaso. Según el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), los más de 3.5 millones de desempleados que hay en el país representan el peor balance que se tiene desde que inició el actual régimen, además de que ha ocurrido un promedio de 900 cierres mensuales de empresas, así como una constante caída real del poder de compra[6].

De tal forma que, en los primeros cuatro años de la presente administración, el empleo formal generado resultó insuficiente para atender la demanda del mercado laboral doméstico, y es previsible que otra gran deuda del sexenio esté en el ámbito del empleo.

En medio de este contexto, de por sí grave, otro elemento recurrente es la paradoja de la capilaridad productiva. Durante el 2010, el desempleo afectó, en mayor medida, a

[2] *La Jornada*, 26 de diciembre de 2010.
[3] *La Jornada*, 6 de septiembre de 2011, p. 15.
[4] *Idem*.
[5] INEGI. *El Sol de México*. 23 de diciembre de 2010.
[6] *La Jornada*, 27 de diciembre de 2010, p. 9.

la población más preparada del país durante la recesión y en plena recuperación económica.

En los últimos dos años, el desempleo de personas con estudios de educación secundaria, media superior y superior aumentó 68% de los desempleados. 1.3 millones de personas en el cuarto trimestre de 2008, equivalentes a 1.78 millones de desempleados que se mantuvo en el mismo lapso de 2010.

Sin duda, la situación que viven las personas con estudios de educación media superior y superior, es preocupante e inquietante. La desocupación avanzó, al pasar de 33% en el cuarto trimestre de 2008, a alrededor de 634 mil personas, a 35% de los desempleados en el cuarto trimestre de 2010 (877 mil personas). La diferencia es de 243 mil desempleados más con estudios de educación media y superior de 2008 a 2010.

En contraste, las personas con hasta seis años de estudios, equivalentes a educación básica o primaria, reportaron menores niveles de desempleo, al pasar de 32% a 29% de la población desempleada en el mismo periodo[7].

C. El mundo laboral de los jóvenes

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del primer trimestre de 2011, la mitad de los 31.7 millones de jóvenes de entre 14 y 29 años forman parte de la población económicamente activa.

De éstos, uno de cada cuatro trabaja en la informalidad, y más del 70% carece de servicios de salud otorgados por su empleador. Actualmente se calcula, que al menos 2 millones de jóvenes buscan empleo. Sólo uno de cada tres jóvenes encuentra empleo en el sector formal[8].

Según la encuesta, los 3.5 millones de jóvenes de entre 14 y 19 años que ya trabajan, tienen un perfil laboral asociado con bajos ingresos y pocas prestaciones; un tercio de ellos trabaja en el sector informal; el 85% no recibe servicios de salud en su empleo; el 18% tiene ingresos de un salario mínimo o menos, y el 26%, ni siquiera recibe un sueldo.

El 22% de este grupo se emplea en el sector primario, pero un tercio de ellos trabaja en la agricultura de subsistencia. En cambio, la población de entre 20 y 29 años tiene mejores condiciones laborales que los más jóvenes. Sin embargo, enfrenta mayores responsabilidades, ya que el 80% de ellos ya es padre de familia.

Uno de cada 10 de estos jóvenes labora toda la semana, pero el 8.4% no cuenta con un empleo que le permita trabajar más de cuatro días. La mayoría de esta población tiene un ingreso de entre 2 y 5 salarios mínimos, y sólo el 5% gana más de 8 mil 850 pesos, que es el equivalente a 5 salarios mínimos. El 9% tiene ingresos de un salario mínimo o menos, y el 7% no recibe un salario por su trabajo[9].

D. Jóvenes: crisis educativa y deserción. El salto al vacío

Ante la creciente demanda de acceso a las instituciones de educación superior, se requiere aumentar la matrícula en un millón 700 mil estudiantes, lo que significa que, en una década, se podría lograr una cobertura de 4.7 millones de jóvenes (48%).

Lo anterior, en razón de que la cobertura estimada para el ciclo 2010-2011 fue de 3 millones 32 mil 824 jóvenes, equivalente a una cobertura de 30.5%. De mantenerse este ritmo de aumento, en 10 años México se encontrará en la posibilidad de avanzar en la solución de un rezago de muchas décadas.

Se dará prioridad a los esfuerzos de ampliación de cobertura en las entidades con mayor rezago, como son: Guerrero, donde apenas 19% de los jóvenes accede a este nivel; Oaxaca, con una cifra de 18%; Chiapas, con un porcentaje igual, y Quintana Roo, el último de la lista, con sólo 16% de jóvenes que ingresan a la universidad[10].

Los jóvenes que cuentan con los ingresos más altos, tienen una probabilidad cuatro veces mayor de cursar una carrera universitaria. Mientras que sólo el 20% de los jóvenes más pobres en el plano nacional acceden a la enseñanza superior.

La disparidad económica y social, además de condicionar el ingreso a dicho nivel educativo, también contribuye a reproducir las divisiones sociales mediante el acceso selectivo a las instituciones, según el origen socioeconómico de los alumnos. No obstante lo anterior, hoy se puede hablar de un recambio en la composición social de la matrícula universitaria, porque los grupos más desfavorecidos se incorporan cada vez más a la enseñanza superior: su número aumentó de 458 mil en 2004 a más de 700 mil en la actualidad.

[7] INEGI, *El Universal*, 22 de enero de 2011.

[8] Héctor de la Cueva. Coord. Gral. del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical.

[9] ENOE. *Reforma*. 12 de agosto de 2011.

[10] Rodolfo Tuirán, Subsecretario de Educación Superior, *La Jornada*, 7 de enero de 2011, p. 35

Indiscutiblemente, la inequidad en el ingreso a la educación superior es resultado de un proceso en el que se acumulan múltiples situaciones de exclusión en la biografía de los jóvenes.

Las brechas están marcadas por región, origen rural-urbano, entre las mismas zonas metropolitanas y por entidades federativas. Así pues, las diferencias entre la ciudad de México y un estado de la República como Querétaro son abismales. En la capital del país, el 57% de jóvenes acceden a dicho nivel de estudios. En contraste, la cifra para los jóvenes queretanos es de apenas 16%, el índice más bajo a escala nacional.

Las entidades con más altos porcentajes en materia de cobertura de enseñanza superior son: Nuevo León (38%); Sonora (37%); Nayarit (37%); Sinaloa (36%); y Colima (35%).

Los estados con más baja cobertura, después de Querétaro, son: Chiapas (18%); Oaxaca (18%); Guerrero (19%); Guanajuato (20%); y Estado de México (21%).

La exclusión se refleja en el rezago educativo, o en el abandono temprano de la escuela. Esto condena a los jóvenes a seguir trayectorias marcadas por la precariedad laboral, la baja productividad, los bajos ingresos, los escasos niveles de bienestar, así como frustración[11].

Cada año desertan de la educación media superior 600 mil jóvenes. De ellos, el 70% abandona la escuela en el primer año. La juventud que está fuera del sistema educativo, no es una amenaza para la seguridad del país, porque no existe una correlación directa entre baja escolaridad o abandono escolar e inserción en los círculos de violencia.

Para el 14.5% de jóvenes que anualmente dejan la escuela, las expectativas de futuro, las posibilidades de vida y desarrollo se reducen, y para este grupo será irrelevante el discurso sobre contenidos, calidad y pertinencia de la educación, ya que ello les resulta completamente ajeno.

La etapa crítica es en el primer año de preparatoria, porque de los 600 mil alumnos que desertan cada año, 420 mil lo hacen al iniciar dichos estudios[12].

E. ¿En verdad divino tesoro?

La revisión de las condiciones en que crecen y se desarrollan las poblaciones infantiles y juveniles, es el hilo conductor que nos permitirá establecer la discusión acerca de dónde están y dónde deben estar las prioridades del gasto gubernamental y, por ende, de las orientaciones sociales.

De entrada, es preciso recordar que, el 44.2% de la población mexicana, es decir, 42.7 millones, enfrenta una situación de pobreza multidimensional. Entre los niños la cifra asciende a 53.3%, esto significa que casi 21 millones de menores están en esas condiciones.

Al desagregar las cifras, encontramos que, mientras en el rango de la población de recién nacidos hasta los 17 años, la pobreza multidimensional extrema llegó a 13.1%, lo que implica en términos absolutos, 5.1 millones de niños y jóvenes, cuando el indicador para la población en general era de 10.5%.

En esta órbita de privación de derechos y de vulnerabilidad creciente, uno de los elementos que se requiere visibilizar, para prevenir y buscar disminuir su frecuencia, es el de la exposición de los infantes a la violencia doméstica; tengamos presente que en 2009, el 8% de la población adulta mencionó haber regañado o pegado a alguno de sus hijos, mientras que, el año anterior, el 5% de los hogares, dijo haberlo hecho. Es decir, la tendencia a la violencia como relación dominante está creciendo.

Dentro de este coctel de factores que describen al México fracturado, hay hechos y relaciones que se convierten en estado de angustia estacionaria, mismos que son minusvalorados para la medición de la llamada cohesión social y el sentido de pertenencia.

El porcentaje de familias que tuvieron dificultades para llevar a sus hijos al médico creció de 19 a 28%; para enviar a sus hijos a la escuela aumentó de 20 a 27%, y aquellos que enfrentaron dificultades para comprar artículos escolares, libros y uniformes pasó de 27 a 44%; y en uno de cada dos hogares, los ciudadanos dijeron haber tenido dificultades para comprar ropa y calzado a los niños, mientras que, en 2008, la cifra era de 35%.

Vigilar y castigar: la obsesión interminable

Uno de los productos ideológicos que ha vendido Calderón para legitimarse y justificar su desenfrenada carrera anti garantista, es la ferviente creencia de que la prisionalización tiene correlación directa con la garantía de la seguridad pública.

Nada más falso que el anterior mito. No hay una relación mecánica entre el número de presos y los índices de inseguridad, por una sencilla razón, a saber: las coordenadas

[11] Rodolfo Tuirán. Subsecretario de Educación Superior. *La Jornada*. 3 de enero de 2011.

[12] Miguel Ángel Martínez Espinosa, subsecretario de Educación Media Superior

desde donde se construyen los delitos son multifactoriales y multidimensionales, y no sólo provienen de la pradera penal, son, más bien, de la amplia galaxia socioeconómica y demográfica.

A. Más policias, más militares, más presos, ¿igual a más seguridad?

La fórmula reiterada y hasta demandada por todos los actores sociales y gubernamentales, es aparentemente sencilla. La oración es: si se aumenta el presupuesto a las aéreas de seguridad y procuración de justicia, tendremos ciudades y comunidades seguras. Pues no. Así no funciona la lógica del delito y la violencia.

Desde el inicio de la administración de Calderón, se ha presentado una marcada tendencia a incrementar el presupuesto del Programa Nacional de Seguridad Pública. En 2007 le fueron asignados 24. 8 mil millones de pesos, 52% más con respecto al año anterior. Asi, el incremento ha sido constante, con un promedio anual de 17%. En términos comparativos, el gasto que más se elevó fue el de los sectores vinculados al enfrentamiento contra la delincuencia.

B. El fetichismo y los militares

Más allá del respeto formal que se tenga a las fuerzas armadas, la sobreestimación a su eficacia en una actividad que no conocen ha superado la sensatez y la cordura. Una perla notable e ilustrativa de ello: el titular del Ejecutivo ha dispuesto de recursos NO autorizados por el Congreso para trasladar recursos al Ejército y a la Marina.

En 2006, la Cámara de Diputados asignó al Ejército y Fuerza Aérea 26 mil 31 millones 900 pesos; pero, a finales de año, los recursos ejercidos sumaron 26 mil 987 millones, cifra 3.7% mayor al monto original; igual mecanismo sucedió en 2010: la Secretaría de la Defensa Nacional recibió un presupuesto de 43 mil 632 millones, y terminó ejerciendo 52 mil 597 millones; es decir, 8 mil 965 millones extras, que representaron un incremento de 20%, según el informe de la cuenta pública de 2010.

La Secretaría de Marina también fue beneficiaria, la Cámara le aprobó, en 2010, recursos por 15 mil 992 millones de pesos, pero terminó ejerciendo 18 mil 416 millones[13].

En este tratamiento privilegiado, también la sobreexposición de las fuerzas castrenses ya dio frutos no satisfactorios. El 36% de los directores de seguridad pública, de los 50 municipios con más homicidios en el país, tienen mandos militares; y los cinco municipios que registran más homicidios –Acapulco. Chihuahua, Ciudad Juárez, Culiacán y Tijuana– tienen como titular a un militar en retiro[14].

C. El país como queso grouyere

Como hemos sostenido, de muy poco han servido las onerosas transferencias presupuestales para cumplir con los propósitos declarados. Pese a que se incrementaron los recursos en 52%, los delitos federales se incrementaron en 20%[15], y los delitos violentos en todo el país se incrementaron ostensiblemente de 2007 a la fecha; además, se reconfiguró el mapa delictivo, al presentarse un incremento en entidades que no figuraban en las estadísticas de inseguridad[16].

Así mismo, pese al discurso autocomplaciente del mundo oficial, se han tenido que exhibir cifras que tienen una lectura distinta a la de los discursos mediáticos. Los límites de la política simplemente reactiva están a la vista: entre 1997 y 2010 se han incrementado en ¡220!% los delitos vinculados al narcomenudeo, en lo que concierne al comercio, suministro y posesión[17].

Del total de homicidios dolosos denunciados durante 2010 en México (esto es 13 mil 936), 77% se concentraron en 12 entidades federativas. Chihuahua fue el estado donde más casos de ese tipo de delito se denunciaron, con 3 mil 514; seguido de Sinaloa, con 2 mil 83; Guerrero, mil 376; Durango, 988; Estado de México, 954; Baja California, 810; Jalisco, 793; Nuevo León, 770; Distrito Federal, 743; Tamaulipas, 666; Michoacán, 633, y Sonora, 606.

Los robos de distintos tipos se incrementaron de 460 mil 506 denunciados durante 2009, a 502 mil 401 el año pasado.

En 2010 hubo un incremento en el número de denuncias por robo de vehículo, así como a casa–habitación y a negocios con 206 mil 944, 104 mil 641 y 76 mil 825, respectivamente. Mientras que, un año antes, las cifras fueron, en el mismo orden, de 184 mil 391, 97 mil 46 y 62 mil 569.

[13] *La Jornada*, 6 de septiembre, p. 10.

[14] CIDE. "Hacia una estrategia para el acceso a la justicia en México", *El Universal*, 17 de septiembre de 2011, p. A5

[15] Centro de Estudios Legislativos.

[16] "Índice de víctimas visibles e invisibles". México Evalúa. Presentado el 23 de agosto de 2011.

[17] Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. *El Universal*. 23 de septiembre de 2011, p. 10.

El número de denuncias por secuestro se incrementó en el periodo antes analizado. En 2010 hubo mil 142 privaciones ilegales de la libertad, mientras que un año antes se presentaron mil 54, una diferencia al alza de 88.

Los robos a transeúntes y a bancos, fueron los dos únicos rubros cuya cifra no se incrementó de 2009 a 2010. Hace dos años, se denunciaron; en el primer caso, 115 mil 727, y 773 robos a instituciones bancarias; en tanto que el año pasado, el indicador señala que fueron 113 mil 256 robos a transeúntes denunciados, y 735 a bancos.

Al sumar los casos de delitos de homicidio, robo y secuestro, el Estado de México ocupa el primer lugar en el índice de incidencia delictiva con 101 mil 117 ilícitos (100 mil de ellos robos). Le sigue el Distrito Federal con 71 mil 216 delitos (70 mil 417 de ellos atracos); Baja California con 45 mil 123 (con más de 44 mil robos); Chihuahua con 40 mil 913 (con más de 37 mil hurtos) y Nuevo León con 30 mil 656 delitos, de estos 29 mil 870 fueron robos[18].

D. La cárcel como sumisión, disciplinamiento y control

El mensaje reiterado de Calderón y seguidores que postulan a la cárcel como el lugar "donde acaban los delincuentes", es, por lo menos incompleto, y más bien refleja los límites conceptuales que subyace de los discursos efectistas y unívocos.

En la actualidad están encarceladas cerca de 224 mil personas (SSPF). De éstas, 177 mil 577 se encuentran presas por delitos del fuero común –de las cuales 105 mil están sentenciadas, el resto aún enfrenta un juicio penal– y 44% de éstas, están bajo detención por el delito de robo. Se advierte que al menos 110 mil personas estarían en prisión por algún delito patrimonial, en su mayoría robo, cuyo monto de agravio es menor a los dos mil pesos.

En 2010, la población recluida en México alcanzó una tasa de 206 personas (por cada 100 mil habitantes); en 1995 había 102 personas en prisión por cada 100 mil habitantes; es decir, en 15 años esta cifra se duplicó, sin que esto implique disminución en la frecuencia y monto de delitos, como tampoco una mejoría en la percepción ciudadana.

México cuenta con 429 centros penitenciarios, con una capacidad para albergar a 175 mil 399 reclusos; sin embargo, en 2010, el número real de internos superaba los 223 mil; es decir, una sobrepoblación cercana al 30%. Destacan el Distrito Federal con una sobrepoblación del 111%, lo que significa tener a más de 40 mil internos en un espacio con capacidad de 19 mil personas; Nayarit, 97%; Sonora, 88%; Estado de México 83%.

En 23 entidades federativas no se clasifica adecuadamente a los internos, pueden convivir en el mismo espacio personas de diferentes tipos de peligrosidad: homicidas con carteristas, violadores con personas sentenciadas por narcotráfico, etcétera. El resultado: el reclutamiento de nuevos miembros de la delincuencia organizada.

Según la encuesta a población en reclusión del CIDE, y sólo para citar el caso del Distrito Federal, se entregan sábanas solamente al 1.64% de los reclusos; cobijas, al 3.52%; ropa, al 1.38% y zapatos al 1.07%; el resto de los 42 mil presos de la ciudad, pagan por esos artículos[19].

Utilizar sólo el brazo punitivo y llenar las cárceles, es muy caro y no nos ofrece buenos resultados. Según un estudio elaborado por la Cámara de Diputados, el costo de manutención de los cerca de 224 mil presos, alcanza una cifra de alrededor de los 34 millones de pesos diarios[20]; cada interno cuesta en promedio 155 pesos al día; sin embargo, esta cifra varía en las entidades, las cuales oscilan entre los 643 pesos en Campeche o los 59 en Guerrero[21].

Cabe destacar, que la mitad de los internos por delitos contra la salud, fueron detenidos por comerciar droga por montos inferiores a los mil 250 pesos, y una cuarta parte por menos de 200 pesos. La mitad de los presos son menores de 30 años[22].

Narcotráfico, violencia y juventud: el laberinto construido

A. De acuerdo con cifras oficiales, el número de infantes presentados ante el Ministerio Público por el delito de delincuencia organizada se ha incrementado en los últimos cuatro años hasta en 70%.

De 2007 a 2010, 5 mil 113 menores fueron detenidos por cometer ilícitos federales, esencialmente contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Ley contra la Delincuencia Organizada. La PGR reconoce únicamente el vínculo de 95 con cárteles de la droga, en ese periodo.

De 714 se desconoce la organización para la cual servían; no obstante: seis formaban parte de "Los Zetas"; cinco de

[18] *La Jornada*, 9 de enero de 2011, p. 6.

[19] "El problema de los penales" de Gustavo Fondevila. *Reforma*, 5 de abril, 2010.

[20] Delincuencia y Seguridad Pública en México. Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. 2 de junio de 2011.

[21] *Reforma*, 21 agosto 2011, Enfoque.

[22] *La Razón*, 28 de julio de 2011, p. 7.

"La Familia"; cuatro de los Beltrán Leyva; dos de "La Línea"; dos del Cártel de Juárez; dos del Cártel del Golfo; dos más de los Arellano Félix; y uno, del Cártel de Sinaloa[23].

B. Los jóvenes son las principales víctimas de la violencia y del crimen organizado. 60% de los 50 mil asesinados en México son menores de 35 años[24].

Un estudio realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, advierte que "cifras de la academia hablan de unos 30 mil niños y niñas que cooperan con los grupos criminales de varias formas: los más pequeños trabajan como vigilantes, los más grandes se ocupan del traslado de la droga, y a partir de los 16 años empiezan a ser contratados como sicarios. Las niñas están involucradas sobre todo en el empaquetamiento de la droga"… (Luis González Placencia. Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal).

C. Entre 2007 y 2009, el número de jóvenes asesinados creció 147%. Pese a que desde el año 2000 se venía registrando un descenso en el homicidio de jóvenes, con un ligero aumento en 2005 y 2006, a partir de 2007 esta tendencia se revirtió completamente, en tanto que en 2007 fueron ultimados 2 mil 977 jóvenes. En 2009 esta cifra creció a 7 mil 348[25].

Un dato nuevo y dramático: El homicidio fue la primera causa de muerte entre los jóvenes en 2009, superando a los accidentes automovilísticos.

Homicidios de jóvenes por rangos de edad 2007-2009

Grupos de edad	*% de crecimiento*
De 15 a 19	124
20 a 24	156
25 a 29	152

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI.

Por otra parte, el homicidio de hombres de 15 a 29 años creció en 154%, mientras que el de las mujeres, en 89%.

La mitad de los homicidios juveniles cometidos en este periodo se concentró en Chihuahua. Mientras en 2007 fueron ultimados 201 jóvenes, en 2009 el registro paso a mil 647, lo que representa un incremento total de 719% en tres años. Otros estados con fuerte presencia del crimen organizado registraron aumentos de homicidios juveniles: Durango, con 154%; Baja California, con 307%; Sinaloa, 298%; Morelos, 190%; Guerrero, 180%, y Nayarit, 162%. Chiapas, es el tercer estado con mayor incremento de homicidios; mientras en 2007 se registraron 27 asesinatos, en 2009 fueron 151; un incremento de 421%.

Con base en datos de presuntos homicidios, relacionados con la delincuencia organizada, se estima que, en 2007, fueron ejecutados alrededor de 366 jóvenes de 16 a 30 años; en 2008, esta cifra ascendió a mil 638; en 2009, a 2 mil 511, y en 2010, a 3 mil 741.

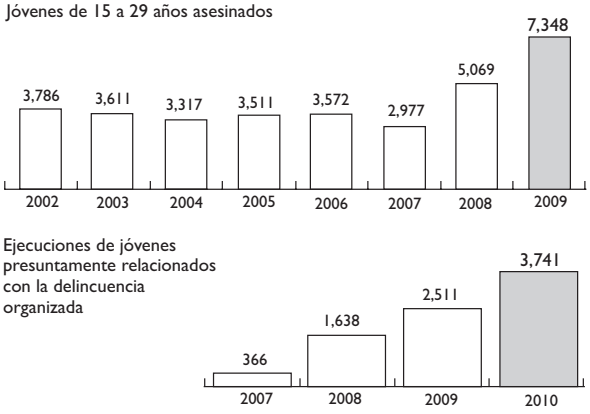
Es importante señalar, que estas cifras están minusvaloradas, en virtud de que en los años analizados no se determinó la edad de al menos 40% de las víctimas. Incluso, en 2007, no se tienen registros de la edad de 63.2% de los muertos por el crimen.

Otro dato relevante, es el bajo perfil educativo de las víctimas registradas: 4% de los jóvenes asesinados entre 2007 y 2009 carecían de instrucción escolar. Asimismo, el 31% sólo había concluido algún grado de primaria, y el 8% no acabó la secundaria.

De los asesinados de entre 25 y 29 años, apenas 6% contaba con estudios profesionales. Casi 70% de las víctimas sólo tenía educación primaria, secundaria o bien no recibió instrucción escolar alguna[26].

Cifra disparada

Entre el año 2000 y el 2007 se dio una tendencia a la baja en los homicidios de jóvenes, con un ligero repunte en 2005 y 2006; sin embargo, en 2008 y 2009 la cifra se disparó



Fuente: Cálculos propios utilizando la base de Datos de Presuntos Homicidios Relacionados con la Delincuencia Ortanizada

[23] *Reforma*, 24 de abril de 2011. p. 4.

[24] Diego Palacios. Fondo de Población de la Naciones Unidas, *La Jornada*, 15 de julio 2011, p. 22.

[25] Cifras de muertes violentas publicadas por el INEGI.

[26] *El Universal*, 12 septiembre 2011, p. A10.

La huida al espejismo

A. Mexicanos huyen a EU por crimen: Durante 2010, 2 mil 973 mexicanos solicitaron asilo al gobierno de Estados Unidos, contrastando con los 254 que lo pidieron en 2009, lo que representa una cifra récord y el incremento de 1000% en un solo año, es decir, 10 veces más, ubicando a México como la segunda nación con mayor número de peticiones de este tipo, dentro de las 10 que encabezan la lista.

De las casi 3 mil solicitudes de asilo hechas por mexicanos este año, 2 mil 320 fueron realizadas en territorio estadounidense y, en 653 de los casos, se trasladaron a la frontera.

Información del Servicio de Ciudadanía y Migración establece que, en 2008, el número de solicitudes de asilo que realizaron mexicanos dentro de Estados Unidos fue de 176; en 2007, 103; en 2006, 84; en 2005, 85; en 2004, 53; en 2003, 35, siendo la cifra más baja de la década. En 2002, 36; en 2001, 52, y en 2000, 42[27].

La violencia multisistémica

Es preciso señalar que un abordaje apropiado para entender a la violencia desde una mirada policromática y multiagencial, debe partir de la evaluación de al menos tres indicadores: el primero, el costo de los comportamientos violentos; el segundo, la victimización y percepción; y finalmente, medir si la inversión pública está impactando en su disminución.

A. El costo de la violencia. Los costos por la violencia en México equivalen al 12.3% del PIB, que representa más de 1.6 billones de pesos anuales.

Según estadísticas del INEGI, en 2010 alrededor de 7.2 millones de personas reportaron haber sido víctimas de un delito en el país; de ellas, el 3.7% dijo haber sufrido una lesión o daño físico, y 17.3%, daño emocional o psicológico. Las víctimas gastaron alrededor de 3 mil 643 pesos en atención médica, psicológica o en servicio de rehabilitación.

Lo anterior significa el costo directo que representó el 4.9% del PIB; por otro lado, un indicador, asociado pero distinto, lo es el costo indirecto –pérdidas por la reducción del consumo a consecuencia de los cambios de hábitos, la disminución de inversiones y la baja en la productividad–, éstos significaron el 7.4% del PIB.

Para valorar el efecto multiplicador de la dimensión de la violencia, destaquemos que, como se vio líneas arriba, los costos indirectos suelen ser mayores que los directos[28].

B. Victimización y percepción. Durante el 2010, los mexicanos desembolsaron 210 mil millones de pesos a consecuencia de la delincuencia[29]. Para tener conciencia de la cifra, recordemos que el presupuesto aprobado para seguridad pública fue de 110 mil millones, con lo que se observa que la población erogó 100 mil millones más que lo invertido por el Estado para aliviar los males de la inseguridad.

En este caso, la traducción del gasto de los ciudadanos por la percepción y victimización, representó el 1.5% del PIB.

C. Inversión y resultados. La gran paradoja de las anteriores mediciones, es que el Poder Legislativo ha aumentado crecientemente el dinero público para combatir a la inseguridad.

El coeficiente de efectividad, medido en delitos de los fueros comunes y federales, denunciados y sancionados, respecto del dinero entregado a SEDENA, SSP, SG y PGR, es de sólo ¡0.9%![30]

Como se ve, el multicitado discurso de la eficiencia gubernamental para el tema de la (in) seguridad pública, corrobora la enorme distancia entre la radicalización de la amenaza punitiva y el cumplimiento práctico de sus obligaciones y las metas prometidas.

El gasto militar. El fantasma de carne y hueso

En México este gasto creció, el último año, a una cifra sin precedente de 64 mil 348 millones de pesos, lo cual significó un incremento de 44%, respecto del monto registrado al inicio de la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa.

La asignación de mayores recursos públicos a la compra de armas, y el mantenimiento de tropas, contrastó con la tendencia del gasto en educación y salud, que reportó incrementos marginales; de igual modo el gasto en salud por habitante en México, el último año, fue equivalente a 515 dólares, mientras al cierre de 2006 fue de 507; finalmente el presupuesto por estudiante de educación básica permaneció sin cambio, respecto del nivel de 2006.

En 2006, el gasto militar se situó en 44 mil 496 millones de pesos, cifra que creció a 52 mil 235 millones en 2007 y, un año después, llegó a 54 mil 977 millones, lo que

[27] Sharon Rummery, Oficial de Relaciones Públicas del Servicio de Ciudadanía y Migración, *El Universal*, 26 de diciembre de 2010.

[28] Eduardo González Pier, *Reforma*, 12 de marzo de 2011, p. 6.

[29] Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE-INEGI, 2010.

[30] Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, *La Jornada*, 19 de septiembre de 2011, p. 5.

representa, en términos absolutos el 0.5,% del producto interno bruto[31].

Concentración del ingreso y fuga de capitales

México acumuló una década pérdida en mejorar la distribución del ingreso. Incluso, en los últimos años, se acentuó la desigual repartición de la riqueza generada en el país, en contraste con lo ocurrido en otras naciones latinoamericanas en las que se registró alguna mejoría.

Una décima parte de los mexicanos que se encuentra en la punta de la pirámide del ingreso concentra 41.4% de la riqueza generada anualmente en el país, proporción similar a la registrada en 2000[32].

La proporción actual muestra un deterioro respecto del nivel registrado en 2006, cuando la décima parte de la población más acaudalada concentraba 37.9% del ingreso nacional.

El ingreso promedio trimestral por habitante en el país es de mil 377 pesos, entre la población que se ubica en el estrato inferior de la pirámide de distribución de la riqueza. En cambio, para la décima parte de los que están en la punta, el ingreso promedio trimestral es de 35 mil 949[33]. Entre los que más ganan y los que menos obtienen del ingreso nacional prevalece una diferencia de 25.6[34].

México es uno de los países con mayor desigualdad en el ingreso: el 10% de la población más acaudalada tiene un ingreso promedio 27 veces mayor al del 10% más pobre. Se trata de una proporción que triplica a la media de los 34 países pertenecientes a la OCDE, que es de nueve veces[35].

Notas concluyentes

La errática e ineficiente trayectoria administrativa y política seguida por Felipe Calderón, corrobora un hecho incontrovertible: El puñado de burócratas que arribó a Los Pinos en diciembre de 2006, careció de formación, experiencia y sensibilidad para encarar los desafíos de una coyuntura compleja y volátil.

El punto de referencia central que explica de manera multisistémica y poliédrica este desastre, es el modelo de dominación política y el modelo de desarrollo dominante, este binomio representa las dos grandes tenazas que han reproducido las taras e inercias con las que ha crecido el país.

Aunque es cierto que Calderón personificó la cerrazón, el sectarismo y el amiguismo, lo es también la existencia de mecanismos e instituciones que son inoperantes y representan un lastre que impiden la reconfiguración y resignificación de una nueva relación entre los actores políticos y la diversidad mexicana. Es obvio que no basta aceitar la democracia sufragista para garantizar la gobernabilidad democrática con equidad e inclusión social.

Ha quedado claro que ni Calderón ni Fox lograron completar el proceso de alternancia política para convertirlo en transición institucional y cultural. Evadieron –por torpeza, falta de talento y carencia de un proyecto integral– su obligación política de desmantelar la perniciosa estructura corporativa y clientelar del PRI; lejos de ello, se adaptaron a las circunstancias que les presentaban las sucesivas coyunturas y convivieron, avalaron y reforzaron, especialmente, a las cúpulas sindicales, cuyos casos paradigmáticos los representan Elba Esther Gordillo, Gamboa Pascoe y las impresentables representaciones sindicales de los petroleros y ferrocarrileros, su sobrevivencia.

Para desgracia del país, el panismo reprodujo los reflejos priístas; los rasgos del viejo presidencialismo se asomaron en algunos actos y comportamientos de Fox y Calderón. El ADN del viejo régimen se recreó y expandió en discursos y gestos, pero lo más trascendente ha sido la visión estacionaria y cerrada que caracterizó la relación de Calderón con segmentos significativos de la sociedad.

Hoy México es un espacio en donde se ha reproducido la desigualdad social, el ingreso real de los hogares se redujo, aumentó la proporción de la población que carece de acceso a la alimentación, los compatriotas que viven en condiciones de pobreza pasaron de 48.8 a 52 millones de personas; y la población que vive en condiciones de la llamada extrema pobreza se mantuvo en 11.7 millones de personas.

Las expectativas que ofrece la compleja realidad nacional y sus componentes internacionales, no son nada gratificantes, esto obliga a reconstruir alianzas, sumar esfuerzos y reconceptualizar dogmas, para evitar que nuestro país ingrese al torbellino de la ingobernabilidad, y con ello, escenifiquemos la peor de las combinaciones: desigualdad social incontrolable, insultante concentración del ingreso y ausencia de una alternativa política con raigambre social y visión de futuro. De ese tamaño son las asignaturas pendientes.

Ojalá se pueda superar la parálisis y la inmovilidad social y política, y encontrar una vía distinta de las que hemos heredado del corporativismo y clientelismo priísta –y sus nostálgicos simpatizantes–; y de la derecha inepta y sectaria que dejó pasar su oportunidad histórica. Veremos.

[31] Banco Mundial. *La Jornada*, 15 de abril de 2011, p. 2.
[32] Banco Mundial.
[33] INEGI.
[34] Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) 2008.
[35] "Abordando la desigualdad" Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2008.